

Proceso de paz: una perspectiva desde la voz de los actores

Semillero Memoria Resistencia y Narrativas¹

La terminación de conflictos armados –prolongados en el tiempo– por vía negociada, es la muestra de que la resolución política es importante para darle fin a los mismos, así lo han demostrado 59 procesos de paz internacionales, de los cuales “44 lo han hecho mediante un acuerdo de paz (74,6 %), 4 sin acuerdo de paz formal (6,8 %) y 11 con victoria militar (18,6 %), lo que reafirma la vía de la negociación como medio de resolución de los conflictos” (Fisas, 2015, p. 23).

Por tanto es posible entender los procesos de paz como

“un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros”. (...) Un “proceso” no es un momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo para en un momento determinado alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la

1 Entrevista realizada por el semillero de investigación Memoria Resistencia y Narrativas, en cabeza del profesor Jhon Mario Muñoz, la cual se encuentra en el marco de la investigación titulada “Memoria, Resistencia y Narrativas; crónicas guerrilleras para exorcizar la guerra”.

situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso mediante el diálogo y el consenso a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física, y mediante la implementación de los acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto (Fisas, 2010, p. 5).

El gobierno colombiano por su parte ha intentado entablar a lo largo de la historia varios procesos de negociación, el primero de ellos dentro del conflicto armado reciente se dio en 1982, encabezado por el entonces presidente Belisario Betancur, el cual convocó a la guerrillas a un acuerdo de paz; dos años después, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP; ordenaron un alto al fuego que duró formalmente hasta 1990, cuando el presidente César Gaviria ordenó un ataque al centro de mando de las Farc. Es en 1990 y después de una larga negociación que se logra la desmovilización de la tercera guerrilla del país, el Movimiento 19 de abril M-19, la cual influyó de manera significativa en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que consolida el tránsito hacia un Estado de Derecho.

En el año 1990 se desmovilizan también otros grupos guerrilleros (Ejército Popular de Liberación EPL, Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, Movimiento Armado Quintín Lame MAQL), en 1992 el Comandos Ernesto Rojas CER, en 1994 la Corriente de Renovación Socialista CRS, Milicias Populares de Medellín MPM, Milicias Metropolitanas de Medellín MMM y Frente Francisco Garnica FFG y en 1998 el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados MIR-COAR. Para el caso de las guerrillas que no se desmovilizaron para ese entonces, se celebran en 1991 y 1992 encuentros en Caracas y Tlaxcala (México) entre el Gobierno colombiano y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, conformada ésta última por la guerrilla de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL, no obstante en 1992 las conversaciones quedaron suspendidas después de que las Farc asesinaran a un ministro que tenían secuestrado (Fisas, 2010, p. 5).

En 1997 se dan inicio a los diálogos del Caguán en cabeza del presidente Andrés Pastrana, no obstante estos culminan en 2002 por falta de voluntades políticas (Turriago, 2016).

En este marco general de los acuerdos de paz gestados por los diferentes gobiernos de turno, en el año 2012 el presidente Juan Manuel Santos dio una conferencia pública en la que anunció el inicio de las negociaciones de paz con

la guerrilla de las Farc-ep, esta negociación culminó en el 2016 con la firma del acuerdo llamado “*Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*”. Este acuerdo contiene los siguientes puntos:

1) política de desarrollo agrario integral y la creación de los territorios campesinos; 2) participación política de las FARC; 3) cese de las hostilidades y dejación de las armas por parte de las FARC; 4) cultivo, producción y tráfico de las drogas; y 5) reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto (Turriago, 2016, p. 171).

Estas últimas negociaciones estuvieron marcadas por una fuerte oposición al proceso de paz no sólo por gran porcentaje de la opinión pública, sino también por parte de personajes políticos con alta legitimidad en Colombia como el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, quien convocó a lo que denominó resistencia civil² una vez fueran pactados los acuerdos de paz.

Aunado a esto, el contexto político del país estaba dividido entre aquellos que apoyaban el proceso de paz y aquellos que lo rechazaban y preferían la salida del conflicto armado por vía militar como se hizo en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, esta división supuso un obstáculo para la implementación de los acuerdos de paz ya que, el 2 de octubre de 2016, día en que se dió lugar al plebiscito, ante la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” la respuesta “No” a los acuerdos pactados en la Habana se erigió con un total de 6.431.376 votos, (50,21 %,) frente a los 6.377.482 sufragios alcanzados por el Sí, que representaron un 49,78 % (Registraduría Nacional del Estado civil, 2 de octubre de 2016).

La prevalencia del “No” en el plebiscito dio lugar a cambios sustanciales a los acuerdos de paz, lo cual generó discrepancias en varios líderes del proceso por las medidas tomadas después de firmado el acuerdo; sumado a esto el incumplimiento por parte del Estado colombiano en lo que respecta a la adecuación³ de los hoy llamadas “Espacios territoriales de capacitación y reincorporación”

2 Véase en: El Tiempo (10 de mayo de 2016). ¿Qué significa la resistencia civil a la que está invitando Uribe?. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16587687>

3 A inicios del año 2017 algunas de las casas de los espacios territoriales de capacitación no estaban terminadas, por ende los excombatientes debían dormir en cambuches; además las unidades sanitarias un no estaban instaladas.

ayudó a aumentar la sensación de incumplimiento en varios de los excombatientes por parte del gobierno colombiano.

Bajo este panorama de polarización entre aquellos que respaldan dicho acuerdo y entre quienes lo ven como una amenaza al Estado democrático, es urgente consolidar espacios de diálogo a través de los cuales se le dé voz a actores que desde diversas esferas políticas y sociales han sido silenciados. Es así como la recuperación de la memoria histórica, como ejercicio democratizante y dialéctico, permite reconstruir hechos y visiones desde diversas perspectivas. Es una apuesta además por trascender el relato hegemónico que ha construido esa visión de la historia como unívoca y oficial.

Para ese cometido es imprescindible la recuperación de esas otras memorias –la de aquellos construidos como victimarios–, lo que se convierte en una herramienta esencial en la construcción de paz y reconciliación. Por ello, en el presente artículo se le dará voz a un excombatiente de las FARC-EP, Ubaldo Enrique Zúñiga conocido en su organización como Pablo Atrato. Esta voz está orientada al planteamiento de verdades individuales que dan cuenta de la postura política del entrevistado, la cual permite reconocer sus convicciones y cosmovisiones para el establecimiento de un adecuado debate público y construcción conjunta de nuevos horizontes de país.

A continuación se presenta la entrevista realizada a Pablo Atrato, vocero político de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC.

Jhon Mario: Cuando se habla de los acuerdos con el Gobierno parece que hay dos realidades: la realidad mediática de la firma y la realidad del territorio. ¿Cuál es la visión de ustedes, directamente desde el territorio, sobre la implementación de los acuerdos?

Pablo: *La implementación en este momento sigue bastante enredada por varias razones. La primera es que yo creo que el Estado colombiano no está preparado para la paz. Todas las condiciones que tiene este país están diseñadas para la guerra. Lo más triste es que no son sólo las instituciones, sino también la mente de quienes componen las instituciones. Una prueba fehaciente es lo que acaba de hacer la corte, que se agarra de una leguleya para poder tumbar el fast track cuando se está hablando de cosas excepcionales, se está hablando de la paz como un derecho y una obligación, y sin embargo embolatan la cosa para favorecer los intereses del capital, de las grandes multinacionales y no el interés nacional que es la paz y el bienestar de la mayoría de los colombianos.*

Si uno estudia los acuerdos, los conoce, encontrará elementos que ya existen en la constitución colombiana. Hay cosas en la constitución por encima de las cosas que están en estos acuerdos pero que no se cumplen, son letra muerta, entonces hubo que hacer un acuerdo, después de 53 años de darnos bala, para que se aplique las constitución en este país; y llega la corte, que son los garantes de la constitución, los guardianes, y echa eso para atrás. Entonces ¿cómo se entiende eso? se entiende que este país no está interesado realmente en la paz, pero me refiero al país que ellos representan, al país de los capitalistas, al país de los neoliberales, fundamentalmente.

J.M: ¿Y qué piensa la base de ustedes, la gente de ustedes, sobre la paz?

P: Nosotros estamos claros en que la paz no es la entrega de las armas, la paz no es el acuerdo, la paz es un proceso que tiene que construirse. La paz, repito, no es el silenciamiento únicamente de los fusiles. Nosotros simplemente somos uno de los factores a los que obligaron a meterse en esta guerra, a defendernos; pero la paz, reitero, es un proceso que tiene que construirse y que debe partir de una cosa elemental que se llama: justicia social. Mientras no haya justicia social, no va a haber posibilidades de paz en este país.

J.M: ¿Cómo los ha tratado el Gobierno en estas zonas de campamentos, cómo ha sido esa tensión? Porque uno lo que ve por los medios es que dicen que están todas listas, pero la realidad es que no es así...

P: El Gobierno ha jugado precisamente con un doble rasero con el tema de la construcción de los campamentos, las zonas y los puntos. Primero trataron de imponernos un modelo arquitectónico que era una especie de campo de concentración, a lo que nosotros nos opusimos totalmente, porque si se trata de hacer unos espacios dignos para los guerrilleros y guerrilleras no podía ser una cuestión de hacinamiento, como un campo de concentración a lo nazi, eso no tiene presentación.

Todas las demoras en la construcción son para que la gente se desanime, para que pierda el interés en esos espacios. Nosotros nos comprometimos a participara en la construcción y lo hemos estado haciendo pero no ha sido fácil. En un principio no había material, después de tres meses llegaron los materiales para poder construir y todavía están llegando, hoy llegó un bote cargado con madera, cuando supuestamente todos los campamentos debieron estar listos desde el 30 de febrero. El Gobierno no es capaz, no fue capaz, de asumir esa tarea, esto

prueba una vez más que tenemos un Estado fallido, un Estado que no es capaz ni de construir un campamento.

J.M: ...Y desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, entonces ¿Cómo sería la implementación? ¿Qué piensan ustedes de los puntos realmente álgidos?

P: Esa es precisamente la desconfianza que hay, no solamente de parte nuestra porque, reitero, lo que hay en esos acuerdos consiste fundamentalmente en soluciones básicas a la gente del campo. En la pedagogía de paz venimos hablándole a la gente que debe apropiarse de esos acuerdos, si no hay unos niveles de organización fuertes, una forma de exigencia mínima y de presión al Estado para que se cumplan esos acuerdos, no se van a cumplir. El Gobierno por oficio no lo va a hacer, porque nunca lo ha hecho, porque eso que está ahí y lo que se está exigiendo, la distribución de la tierra, acabar con la leyes del campo en la ciudad, el mejoramiento de servicios públicos, las escuelas... eso está en la constitución, son derechos fundamentales, ahí no se está hablando de una cosa distinta a lo que ya existe en la ley. Entonces, si no mejoramos los niveles de organización, de lucha en la gente, nada va a pasar. En eso consiste la pedagogía de paz: en que la gente se apropie.

J.M: ¿Han tenido muchos obstáculos para desplegar la pedagogía de la paz? porque los permisos para salir son difíciles a veces, los tienen confinados y se supone que ya tendrían que desplegar todas esas actividades para estar consolidando un proceso más maduro...

P: Ese es otro punto, no habíamos podido salir. Hasta hace una semana comenzamos a salir a las comunidades a plantearles la información alrededor de los acuerdos. Lo hemos venido haciendo pero porque la gente ha venido hasta aquí, por ejemplo de esta área han pasado 35 consejos comunitarios, de Riosucio, de El Carmen del Darién y de todos estos sectores. Lo fundamental es logremos que la gente mejore sus condiciones organizativas y de reclamo de sus derechos.

Los acuerdos son solo un catálogo de buenos deseos de que se cumplan esos derechos, de que el Estado los pueda cumplir. Ya han comenzado a venir a engañar a la gente a través de una oficina que no sé ni cómo se llama... la oficina del pos conflicto que maneja Pardo, ofreciéndoles un monto de cuatrocientos cincuenta millones de pesos para resolver el problema de infraestructura de toda esta zona del bajo Atrato. Eso es una estupidez, eso suena absurdo, ¿con cuatrocientos cincuenta millones qué va a hacer?, y que a las seis o cinco comunidades que están alrededor del punto les dan de a cincuenta millones de pesos y galpones de pollo, o sea, con lo mismo, cosas que no sostienen, que no van a resolver

ningún problema de fondo y eso no es lo que queremos y ya hay gente dispuesta a no aceptar esas cosas.

J.M: ¿Entonces qué van a hacer?

P: Seguir peleando a partir de lo que está en el acuerdo, según la constitución de los proyectos de desarrollo social comunitario con enfoque étnico y en el marco de lo que se apruebe con la comunidad en esos planes de desarrollo social. Eso es lo que hay que construir y no lo que ellos tengan pensado allá en Bogotá sin tener en cuenta a la gente.

J.M: O sea que es básicamente lo que está pidiendo la gente del Chocó en el paro de este momento...

P: Sí, exactamente, que se tenga en cuenta el enfoque étnico, porque Bogotá construye una propuesta para desarrollarla en un territorio que ellos no conocen, entonces eso no tiene sentido y es lo que históricamente han hecho, por eso tenemos el atraso que tenemos.

J.M: Teniendo en cuenta la parte histórica de vulneración de derechos y de desapego del Gobierno hacia el Chocó ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a esta movilización, qué apoyo les están dando a la gente en esa manifestación, cómo ve los resultados del paro en una zona de exclusión tan fuerte históricamente?

P: El desapego del establecimiento del Gobierno o de los empresarios de Chocó no existe, el desapego es frente a la población. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas: a ellos les interesa es el territorio, pero sin comunidades, sin poblaciones, porque la riqueza desde el punto de vista económico, es decir, la biodiversidad, la minería, todo lo que hay en este territorio no lo hay en cualquier parte en el mundo, digo del mundo, porque además el Chocó tiene un ventaja: que está sobre los dos mares, sobre el Pacífico y sobre el Atlántico, esto es geoestratégico; y si nos vamos a la parte de abajo, a la parte del Atrato, peor todavía porque estando en Riosucio y Chocó estás en Centro América. Además hay unos proyectos que se vienen manejando hace muchos años que es una propuesta que hizo Antioquia que es: "Antioquia la mejor esquina de América" y en donde ellos tienen la mira puesta en el Chocó desde hace mucho tiempo y repartírselo con el Valle del Cauca. Por eso nunca es viable el Chocó como departamento, porque todo está diseñado para distribuírselo entre ellos. Aquí los intereses económicos que están en juego no son pocos, lo que pasa es que ellos se equivocaron en varias cosas a partir de la constitución del 91 y la implementación de la ley 70

de negritudes que colectivizó este territorio y montaron a la gente sobre la mina de oro, de platino y sobre los mejores terrenos. Esa es la preocupación que ellos tienen y hoy, a través del fenómeno paramilitar, han hecho todo lo posible y lo imposible por desalojarlos y lo han hecho desde el 97, aunque la ley sale en el 93, al poco tiempo se dieron cuenta y trataron de desplazar, pero la gente ha resistido, ha regresado. Ese es el problema fundamental que ellos tienen.

Lo del paro del Chocó, lo de las luchas que se han venido generando en los últimos días, años, meses, obedece fundamentalmente a que la gente se cansó de la miseria, del abandono estatal porque están en juego otras cosas. De todas formas, en el Chocó hay muchas dificultades desde el punto de vista organizativo, porque la clase política a coartado a los líderes negros, los tienen a su favor a muchos de ellos, los compran con dinero y la gente cada cual va por lo de ellos, son individualistas, muy a pesar de que el territorio está colectivizado, hay mucha dificultad todavía para que la gente entienda el espíritu de esa Ley, que a pesar de que uno pueda tener diferencias con ella, es lo más favorable para ellos.

J.M: ¿Esta Ley cómo entraría a reñir con uno de los puntos de la Habana que es la reforma agraria?

P: Se trata de una reforma pero en la que no se tocan los territorios colectivos, el punto uno favorecería a los territorios colectivos en lo que tiene que ver con beneficios, lo que vaya a mejorar la condiciones de este territorio pero no en distribución de estos territorios. Estos territorios ya están adjudicados y son de carácter colectivo tanto de los indígenas como de los negros, ahí no hay nada que hacer, al contrario, eso es lo que hay que fortalecer: su colectivización. Estos territorios no se van a tocar. De lo que estamos hablando es de baldíos, de los poseedores de mala fe, estamos hablando de otros territorios, no de los colectivos de comunidades negras.

J.M: Y ustedes cómo apoyan a los colectivos de territorios que la Ley 70 ampara ¿Están dándole algún tipo de apoyo a esta gente para que no se dejen desplazar nuevamente?

P: Sí, nosotros insistimos en mejorar los niveles de organización de la gente, los consejos comunitarios que son la forma organizativa que la Ley 70 previó. Queremos que se hagan de la mejor forma y que la gente pueda seguir defendiendo estos territorios. Por ejemplo, aquí donde estamos en el Punto Transitorio de Normalización, Silver Vidal Mora, pertenece a una señora que se llama Claudia Argote que es una poseedora de mala fe y que desde el 2012 o 2013 hay una orden de desalojo por parte de la corte que no se ha cumplido, ¿y qué hace el Gobierno?

avala a esta poseedora de mala fe haciendo un trato de arrendamiento de 12 hectáreas por 60 millones de pesos.

J.M: ¿Eso pasa acá, donde están ustedes?

P: ¡Donde estamos nosotros! es una contradicción de las más terribles. Mientras la corte está diciendo que hay que desalojar y entregarles esos territorio a los consejos comunitarios, el Gobierno arrienda con ella, cuando está claro que es una poseedora de mala fe, que adquirió estos terrenos de forma ilegal, que hay gente desaparecida, que hay muertos detrás de esa adquisición y sin embargo el Gobierno hace un contrato con ella.

Entonces fíjese, queda claro que simplemente es a través de la lucha, a través de la pelea diaria como se puede quitar la cosa. Hay que tener unos niveles altos de organización y de responsabilidad frente a esto, de lo contrario no es posible.

J.M: Hay un punto que me parece muy importante y es la necesidad de establecer una articulación ahora que ustedes se van a lanzar a la vida política, se requiere que la gente conozca de manera masiva lo que está pasando y las propuestas de ustedes, que esa pedagogía y esas propuestas vayan a otros escenarios. ¿Cómo piensan hacerlo, no solamente en el territorio inmediato, sino a lo ancho y largo del país?

P: *Eso es lo que tratamos de hacer. La gente nos está invitando a las universidades y a las ciudades a que presentemos nuestra propuesta, pero te quiero señalar y decir algo: nuestras propuestas, más que nuestras, son propuestas de la gente. En el acuerdo, por ejemplo, lo que se recoge en lo relativo al desarrollo integral del campo son las propuestas que las organizaciones agrarias y agropecuarias a nivel nacional llevaron a la mesa. Nosotros lo que hicimos fue una recopilación de cien propuestas alrededor de eso. Pero esas cien propuestas no están tal cual en el acuerdo, que esa fue la pelea con el Gobierno, pero son las propuestas que se recogieron con la gente y hoy las seguimos defendiendo, impulsando, porque en el acuerdo hay una mínima parte. Y ese es el otro tema porque hoy, en la etapa de implementación que pasa por el fast track y por el congreso, se le sigue dando machete y recortando a esas propuestas: lo que no ganaron en la mesa de negociación, lo quieren ganar hoy en el congreso, en otros espacios.*

J.M: Sí, porque la crítica que se ha visto en sectores alternativos es que la propuesta de tierra después de ganar el “No” y que hubo una negociación con los del “No”, la recortaron y ahora no se sabe claramente cómo va a quedar...

P: Sigue recortándose, o sea que al final no va a quedar acuerdo, lo decía el artículo de María Jimena esta semana, “lo volvieron trizas”. Después de cinco años de discusión, de cinco años de mesa en la Habana hoy no hay acuerdo.

J.M: ¿Cómo lograr que haya verdaderamente esa organización comunitaria de la gente que sale de las Farc para seguir con el trabajo político y poder lidiar con lo que ha pasado en casos como el de la Unión Patriótica, el exterminio de personas que entran al proceso de paz... cómo lograr la organización en una coyuntura electoral en un país que cada día se vuelve más derecho?

P: La verdad es que ese es el reto mayor. Primero tratar de mantener la fuerza, ya no desde lo militar; sino desde el punto de vista político, porque desde el punto militar era fácil, teníamos unos reglamentos, unas normas y todo el mundo se regía por ellas. Mantener esta fuerza, desde lo político, va a depender del nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Lo fundamental es que podamos coaccionarnos a partir de una propuesta de carácter económico que nos permita mantenernos, sostenernos como civiles, porque si no se resuelve el tema económico no hay nada que hacer, cada cual va a tratar de ver cómo se rebusca. Y desde el punto de vista social es la inserción junto con las comunidades. Nosotros hemos convivido con ellos durante cincuenta años, o sea, no es difícil, pero tenemos que ajustarnos a nuevas reglas de juego con ellos. Sin embargo, repito, para mí lo fundamental para poder sostener esa parte crítica es que podamos resolver lo relacionado al sostenimiento de cada uno de nosotros, que hayan unos ingresos básicos que nos permitan sobrevivir y mantenernos y si eso está alrededor de la propuesta que tenemos, va a ser mucho más fácil, sino conseguimos eso, va a hacer muy complicado.

J.M: ¿Y la seguridad de ustedes, cómo la ven?

P: En el acuerdo hay algunas cosas que aparecen con respecto al tema de seguridad. Tenemos que exigir la implementación, la puesta en marcha de ese organismo de las cosas que están planteadas ahí para la seguridad tanto personal como colectiva, no solamente para nosotros sino para las propias comunidades. Eso está en el acuerdo también bien claro, el problema es que realmente conciliemos la presión suficiente para que el estado cumpla con eso.

J.M: Porque ya van más de cien líderes asesinados, líderes que tienen cierta cercanía con las propuestas, peor aún para ustedes después de entregar las armas porque ya son directamente partícipes de la guerra...

P: Sí, ese el riesgo. De todas formas la guerra era un riesgo y este es otro, porque aquí tenemos también que ser claros con eso. En el transcurso de estos

53 años de lucha revolucionaria armada estábamos todo el tiempo arriesgando la vida, que nos caiga una bomba, un tiro con un fusil, que caigamos en una mina, cosas como esas, hoy el riesgo sigue siendo casi que igual pero bajo otras condiciones y lo estamos asumiendo. Una de las primeras cosas que se están haciendo tiene que ver con la seguridad personal, que mil doscientos guerrilleros van a dedicarse a ese tema pero de todas formas no deja de ser un riesgo porque hay enemigos y resentidos frente al tema de la guerra, también hay mucha gente que vive de la guerra, y esas son las principales personas que se van a seguir oponiendo a todo este proceso.

J.M: Uno de los puntos de la Habana es el desmonte del paramilitarismo y uno lo que ve es que está en crecimiento y no se está desmontando. ¿Qué están planteando ustedes frente al paramilitarismo y a la violencia que se puede generar, pero sobre todo frente al cumplimiento del gobierno del desmonte de estas estructuras?

P: Lo que está mostrándose en este momento es que no hay ninguna voluntad política del Gobierno de desmontar el paramilitarismo, muy por el contrario, está creciendo y la connivencia y la participación de las Fuerzas Militares en este fenómeno es claro. Por ejemplo en Riosucio, la Infantería de Marina con los paramilitares: unos por una orilla y los otros por la otra y no los ven, eso pasa en este territorio donde nosotros nos movemos y hemos hecho presencia durante tantos años, Aquí mismo, en Brisas, hay una base militar que supuestamente está para la seguridad de este punto y ahí están los paramilitares y hay un tal famoso gringo que todo el mundo lo conoce y es el jefe paramilitar y nadie lo captura; pero sale un campesino a vender una vaca y lo captura el Ejército que porque la vaca es robada y lo acusan de ser guerrillero, todavía a estas alturas, eso ha pasado hace poco. Entonces lo que se ve es que no hay realmente voluntad política ni unas condiciones mentales del establecimiento colombiano por la paz. Todo está en función de la guerra y siguen como si estuviéramos en guerra y esos son los retos que tenemos. Las Farc estamos en este propósito de seguir adelante con el proceso, sabemos que todas estas dificultades van a ser muy complejas, muy duras y que muchos de nosotros, seguro, van a quedar en el camino.

J.M: Lo que uno ve estando aquí en la zona campamentaria, es que efectivamente el incumplimiento del Gobierno ha sido bastante. Aquí se siente que ustedes están comprometidos y decididos por la paz, parece ser que ya no tienen marcha atrás, pero ¿cómo coadyuvar nosotros para que más gente se dé cuenta de que está pasando acá, cómo están viviendo ustedes, cómo hacer entonces un llamado a los

